

RV: CONCEPTO DE CONCILIACIÓN - DEMANDANTE: NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA - PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA No. 68001310500320220033700

Juzgado 03 Laboral - Santander - Bucaramanga <j03lcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 10/08/2023 8:34

Para:Luis Evelio Jaimes Vargas <ljaimesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:Efrain Yamid Vanegas Galeano <evanegasg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (876 KB)

Concepto Comité Conciliación 2022-337 NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA.pdf;

De: Mayoris Sanchez Galindez <mayorissanchez27@gmail.com>

Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 8:00

Para: Juzgado 03 Laboral - Santander - Bucaramanga <j03lcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Achaparro2701@gmail.com <Achaparro2701@gmail.com>; cristian@gruposolpensiones.com <cristian@gruposolpensiones.com>; Natalia Andrea Sepulveda Ruiz <accioneslegales@proteccion.com.co>; notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; sistemasarellano <sistemasarellano@gmail.com>; Saray Riatiga <coord.santander.aj@gmail.com>; abogado1@aja.net.co <abogado1@aja.net.co>

Asunto: CONCEPTO DE CONCILIACIÓN - DEMANDANTE: NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA - PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA No. 68001310500320220033700

Bucaramanga, diez (10) de agosto de 2023.

Señores:

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
Ciudad

Cordial Saludo;

MAYORIS SANCHEZ GALINDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.089.480.214 y Tarjeta Profesional No. 234668 del CSJ, en mi condición de apoderada sustituta de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, allegó a través de este medio, Concepto de Conciliación emanado por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones, a fin de que sea tenido en cuenta por su Despacho en la audiencia de conciliación, dentro del Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, radicado bajo el No. 68001310500320220033700, instaurado por el señor NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA, en contra de COLPENSIONES.

Así mismo, en atención a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso y en el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022, se envía copia de este correo a las demás partes procesales.

De igual forma me permito informar a su Despacho, que para efectos de notificación y conforme la actualización realizada ante la unidad de Registro Nacional de abogados (URNA) mi correo electrónico es: mayorissanchez27@gmail.com y número de celular 3105408203.

Por lo anterior, anticipo mis agradecimientos

Cordialmente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mayoris B'.

MAYORIS SANCHEZ GALINDEZ
CC. No. 1089480214
T.P No. 234668 del CSJ

Señores:

JUZGADO 003 LABORAL DE CIRCUITO DE BUCARAMANGA

E. S. D.

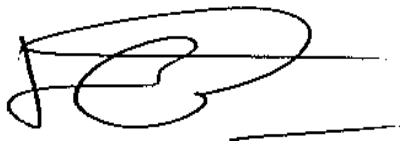
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
RADICADO: '68001310500320220033700
DEMANDANTE: NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA
IDENTIFICACION: 13884302
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E

Cordial saludo,


LUIS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.736.240, portador de la Tarjeta Profesional No. 56.392 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de Apoderado Judicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, respetuosamente me permito allegar al despacho judicial CONCEPTO DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL No. **119192023** Con Acta No. **126-2023** del **8/2/2023** del proceso de la referencia.

Anexo al presente escrito copia del Concepto.

Del señor Juez, Atentamente:



LUIS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO
C.C. No. 16.736.240
T.P. 56.392 del C.S. de la J.
Apoderado Judicial
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

CERTIFICACIÓN NO. 119192023

La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA

Que tal y como consta en el Acta No. 126-2023 del 2 de agosto de 2023 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del caso **NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No **13884302**, en proceso bajo radicado No **68001310500320220033700**, quien pretende;

“DECLARATIVA:

Que se declare la ineficacia del traslado de pensiones de COLPENSIONES perteneciente al RPMPD, finalmente a COLFONDOS S.A, perteneciente al RAIS – PORVENIR declarando que siempre ha estado válidamente afiliado a COLPENSIONES sin solución de continuidad.

CONDENAS:


- 1. Que se condene a PORVENIR S.A, PROTECCIÓN S.A y COLFONDOS S.A, a devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiese recibido por motivo de afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas de las aseguradoras, con todos sus frutos, como rendimientos financieros, intereses y gastos de administración.*
- 2. Que se condene a COLPENSIONES, a validar los aportes en pensiones, trasladados por PORVENIR S.A, PROTECCIÓN S.A, y COLFONDOS S.A y a incorporarlos a la historia laboral en pensiones del asegurado.*
- 3. Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.”*

Dicho órgano decidió:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

En el presente asunto, pretende la parte actora la declaratoria de ineficacia de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el consecuente traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones.

Como sustento de sus pretensiones el demandante NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA, manifiesta que la Sociedad Administradora del RAIS, incumplió con el deber de información que le corresponde, razón por la cual su traslado se torna ineficaz.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Para decantar lo anterior en primer lugar resulta del caso referir que frente a la posibilidad con que cuentan los afiliados al Régimen de Seguridad Social en Pensiones de migrar de forma libre, consciente y voluntaria de un Régimen Pensional a otro, se tiene:

El artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, señala que los afiliados al Sistema General de Pensiones después de efectuada la selección inicial podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años, y no podrán hacerlo cuando les falte menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.


Por su parte el Decreto 3800 de 2003, que reglamenta la norma atrás citada, señala en su artículo 3°, que las personas quienes a 1 de abril de 1994 cuenten con 15 años o más de servicios prestados o semanas cotizadas, podrán trasladarse al Régimen de Prima Media en cualquier tiempo, situación está que fue reiterada y ratificada por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU 130 de 13 de marzo de 2013.

Y en igual sentido frente a la limitación de los traslados la Corte Constitucional ha determinado que la misma no obedece a un capricho del legislador, sino que encuentra fundamento en la necesidad de conservar el principio de sostenibilidad financiera y fiscal del Sistema, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 334 de la Constitución Política este se encuentra atado al derecho a la seguridad social, situación que ha sido decantada ampliamente entre otras en las Sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 C 626 de 2007 y SU 062 de 2010, jurisprudencias en las que se ha determinado que la posibilidad de permitir traslados cuando falten menos de diez años para el cumplimiento de la edad descapitaliza el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues la declaratoria de ineficacia y consecuente orden de afiliación al RPMPD, puede llevar consigo la necesidad de hacer uso de los recursos del fondo común que han formado los afiliados, poniendo en riesgo su derecho pensional y estableciendo además que los derechos a la libre elección y/o pensionales no son absolutos, y pueden verse limitados por razones de utilidad pública en interés social.

En dichas providencias el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional determinó que aceptar los traslados por fuera de los términos establecidos en la Ley, lesiona la planeación en la asignación y distribución de recursos del sistema pensional, en tanto ello requiere el uso de recursos que no están presupuestados y que corresponden a los ahorrados por los afiliados al sistema.

Adicional a ello expreso que el periodo de permanencia obligatoria y la limitación de traslado, tiene como fin garantizar la efectividad de los principios de universalidad y eficiencia, así como la intangibilidad y sostenibilidad del sistema, a través de la preservación de los recursos que permitan el pago futuro de las mesadas y su reajuste periódico.

Frente a lo que precede y descendiendo al caso bajo estudio se encuentra probado que el señor NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA, nunca estuvo afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el ISS hoy Colpensiones, que realizó un traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de PROTECCIÓN S.A, el día 14 de agosto de 1995, posteriormente ante HORIZONTE S.A hoy PORVENIR S.A, el día 28 de abril de 1997 y finalmente ante COLFONDOS S.A, el día 13 de octubre del año 2000, adicional a ello se tiene que el día 27 de julio de 2022,

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

presentó una solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, situación está que permite concluir que en el presente asunto no es posible la afiliación del actor al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado hoy por Colpensiones, toda vez que está en ningún momento ha pertenecido al ISS hoy COLPENSIONES, y en tal sentido no resultaría dable aceptar la procedencia de un retorno hacia una entidad a la cual nunca se ha estado afiliado, pues ello implicaría una clara vulneración a la sostenibilidad financiera del sistema pensional y una carga excesiva para los afiliados que han decidido pertenecer durante su vida laboral al RPMPD.


De igual forma se encuentra demostrado que la accionante nació el 23 de febrero de 1957, por lo que actualmente cuenta con 66 años de edad y la solicitud de traslado la realizó el día 27 de julio de 2022, esto es cuando ya había cumplido con la edad requerida para acceder al derecho pensional.

Lo anterior permite concluir que la negativa de Colpensiones para aceptar el traslado del señor NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA al RPMPD, se encuentra conforme a Derecho, teniendo en cuenta que este no presentó solicitud de traslado antes de cumplir los 52 años de edad, ni tampoco hizo uso del periodo de gracia para promover el traslado, consagrado en el Decreto 3800 de 2003, así como tampoco acredita los 15 años de servicios o semanas cotizadas a 1 de abril de 1994, que la habiliten para retornar en cualquier tiempo.

Ahora bien, frente al engaño derivado de la falta de información o vicios del consentimiento por parte de la Administradora del RAIS, debe decirse que si bien es cierto, acorde con lo dispuesto en el Decreto 663 de 1993, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1748 de 2014 junto al Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa No. 016 de 2016, a esta le asiste el deber de información necesaria y transparente, asesoría y buen consejo y doble asesoría, respectivamente, lo cierto es que en el Sub Judice no es posible colegir que la ausencia o indebida información de PROTECCIÓN S.A, PORVENIR S.A y COLFONDOS S.A, frente a las reales características de los dos regímenes pensionales, las mesadas que percibiría el actor y las implicaciones o alcances de tales cambios hayan motivado su decisión de cambio de régimen pensional, o que su decisión de traslado no se haya realizado de forma libre, voluntaria y sin presiones.

Por su parte el Decreto 2241 del año 2010 y la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la Sentencia SL 2810 de 2019, establecen que la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por tratarse de un contrato bilateral, deriva la existencia de obligaciones recíprocas entre las Administradoras de los Fondos de Pensiones y los Consumidores Financieros, de tal forma que ciertos comportamientos del ciudadano denotan el compromiso de pertenecer al Régimen y de igual forma el silencio frente a sus afiliaciones presumen la aceptación de los efectos legales de estas, así como la ratificación de las presuntas deficiencias que se hubiesen podido presentar en ese trámite de afiliación.

Descendiendo al caso de marras y del acervo probatorio que reposa en el plenario y contrario a lo referido por el demandante, es posible colegir su voluntad de pertenecer y querer permanecer en el RAIS, esto por cuanto el mismo no solo se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado a través de a través de PROTECCIÓN S.A, el día 14 de agosto de 1995, posteriormente ante HORIZONTE S.A hoy PORVENIR S.A, el día 28 de abril de 1997 y finalmente ante COLFONDOS S.A, el día 13 de octubre del año 2000, sino que además no presentó solicitud de traslado al RPMPD,

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	


en los términos del artículo 2° de la Ley 797 de 2003, situación está que permite colegir que el mismo conoció las condiciones y beneficios que le reportaría tal decisión y se encontró conforme con ella, pues de no ser así hubiera optado en dicha época por retornar al RPMPD, adicional a ello se tiene que esta no solicito ante el extinto ISS hoy COLPENSIONES, asesoría alguna frente a sus derechos pensionales, antes de cumplir los 52 años.

De otro lado contrario al criterio asumido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, frente a la carga dinámica de la prueba en casos como el presente, debe decirse que está atendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-086 de 2016 y el artículo 167 del C.G.P no puede ser aplicada en forma genérica y sin ninguna ponderación a todos los casos, por el contrario, debe estudiarse de conformidad con las particularidades específicas de cada uno de ellos.

Lo anterior encuentra sustento en que la obligación de la carga de la prueba en cabeza de quien pretenda probar el hecho, busca garantizar la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal y así evitar la inercia probatoria de una de ellas en el proceso, de tal forma que su inversión únicamente resulta valida frente a la existencia de una parte débil, esto es que carece de capacidades para ilustrarse y asesorarse de la mejor manera, situación que ha sido decantada entre otras por la Honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-422/2011, providencia en la que dicha Corporación indico que en materia de traslado, la libertad de escoger el régimen pensional se ve menguada o adolece de algún vicio en el consentimiento, cuando los hechos de la controversia permitan dilucidar que la persona era una parte débil debido a su calidad y escasos conocimientos, siendo procedente el regreso automático, situación que no se evidencia en el presente asunto más aún si se tiene en cuenta que la accionante opto por afiliarse al RAIS, sin solicitar el respectivo retorno al RPMPD, dentro de los términos legales dispuestos para ello y además ostenta un alto grado de conocimientos en el derecho.

Por su parte, resulta del caso referir que, si bien es cierto la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral de forma generalizada, entre otras en la Sentencia SL 1452-2019 de 03 de abril de 2019 Radicación 68852. M.P: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, considera que el incumplimiento del deber de información o la ausencia de consentimiento informado genera automáticamente la ineficacia de traslado, dentro de ese mismo pronunciamiento el Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, aclaro su voto en el sentido de considerar que la declaratoria de ineficacia debe proceder siempre y cuando la ausencia de información o la inexistencia del consentimiento informado hayan producido un perjuicio para el afiliado en el momento en que se produjo el traslado y no simplemente porque con el paso del tiempo este considera que con tal afiliación no se cumplen sus aspiraciones pensionales, situación que no acredita la hoy actora, pues este para el momento de su afiliación al RAIS, no era beneficiaria del Régimen de Transición, ni contaba con una expectativa pensional consolidada, ni estaba próxima a conseguirla, razón por la cual no se podría hablar de la configuración de perjuicio alguno, que justifique la procedencia de declarar la ineficacia del traslado por ella pretendido.

Finalmente debe referirse que, en caso declaratoria de ineficacia de traslado de régimen, en el sub-judice se configura la inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP COLFONDOS S.A ante Colpensiones, ello teniendo en cuenta que esta desde el punto de vista jurídico se entiende como un mecanismo protector, que tiene como fin la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros de buena fe.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Vale decir que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación civil, entre otras en la Sentencia SC91842017. Radicación No. 11001-31-03-021-2009-00244-01 de 28 de junio de 2017, M.P: ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, respecto al concepto de Inoponibilidad, ha referido:

“(…) La inoponibilidad, por tanto, es un mecanismo jurídico para proteger los intereses de los terceros relativos, es decir aquéllos que no son parte de la relación contractual cuya eficacia se cuestiona, pero resultan afectados por ella en virtud de un negocio jurídico distinto.


(…)

La inoponibilidad de un negocio jurídico no es un dogma, “sino un beneficio flexible consagrado para favorecer a los terceros de buena fe”, según sus concretos intereses jurídicamente protegidos, que bien pueden consistir en que los efectos del negocio jurídico eficaz entre las partes no los irradien, o, todo lo contrario: que el negocio jurídico ineficaz entre las partes conserve sus efectos frente a terceros. (…)”

En este sentido se tiene que al constituir la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, un contrato bilateral entre las Administradoras de Fondos de Pensiones y los afiliados, claramente se tiene que la declaratoria de ineficacia o nulidad que de ellos surja, no resultaría oponible frente a terceros de buena fe, que en casos como el presente por ser objeto de debate la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad realizado por el actor, lo sería Colpensiones, entidad que no estaría obligada asumir las consecuencias que implique la declaratoria de ineficacia, pues como se refirió en precedencia la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida en la protección pensional de aquellos afiliados que durante su vida laboral han aportado al fondo común por ella administrado, pues es claro que la aceptación de afiliados que permanecieron en el RAIS, a través de un contrato cuya validez se presume para Colpensiones, podría claramente poner en riesgo no solo el derecho pensional de los afiliados al RPMPD, sino que además esto podría tener alcance o consecuencias frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

Así las cosas y siguiendo el criterio esbozado por la Sala de Casación Civil, según el cual la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, lo que permite colegir que algo que es ineficaz entre las partes, como en este caso se presume lo es la afiliación del señor NELSON RODRIGUEZ SEGOVIA, en caso de declaratoria de ineficacia, no podrían extenderse sus efectos frente a Colpensiones, siendo obligación de COLFONDOS S.A, asumir el desmedro patrimonial que podría sufrir la reserva pensional del RPM como consecuencia del traslado irregular al RAIS, muy respetuosamente solicito se ordene a COLFONDOS S.A, devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, esto es no solo las cotizaciones realizadas, los bonos pensionales, las sumas adicionales de la aseguradora, con frutos e intereses, sino además los rendimientos causados, así como gastos de administración y los deterioros sufridos, esto es la merma en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez.

Ahora bien, en lo que respecta al pago de los intereses moratorios, contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que su aplicación no es automática, ya que se debe tener en cuenta

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

las circunstancias que rodean cada caso en particular, puesto que en muchas ocasiones los reconocimientos judiciales emergieron de cambios de precedentes, de interpretaciones o aplicación de principios que daban un alcance diferente a la Ley al que ofrece su tenor literal, lo que devenía en que la postura administrativa de la entidad administradora tuviera asidero en la aplicación minuciosa de la Ley o un respaldo normativo diferente al que se utilizó para dirimir la controversia judicial, así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2756-2017 del 22 de febrero de 2017, Radicación n.º 68425, Magistrada ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO en la que sostuvo que:


“Le asiste razón a la censura, toda vez que como lo ha reiterado esta Sala, los intereses moratorios son improcedentes cuando, como en el sub lite, la administradora de pensiones niega la prestación con fundamento en el tenor literal de la ley, sin los alcances que en un momento determinado puedan darle los jueces en su función de interpretar las normas sociales y bajo los principios fundamentales de la seguridad social, que a las entidades les es imposible predecir”.

En este sentido, es del caso indicar que igualmente tal y como se ha señalado el órgano colegiado en Sentencia SL232 de 2018, cuando la negativa administrativa se encuentra respaldada por la aplicación de una norma vigente, bajo este entendido, si bien en cada uno de estos supuestos no se escudriña sobre la buena o mala fe la entidad, si se explora sobre circunstancias particulares y objetivas que hayan rodeado la instancia administrativa.

En igual sentido en sentencia SL 552 de 2018 adujo la mentada Corporación:

“Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia”.

Igualmente, conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con lo establecido por la Corte constitucional entre otras en la Sentencia SU 065 2018 de trece (13) de Junio de dos mil dieciocho (2018) M.P: Alberto Rojas Ríos, el reconocimiento de intereses moratorios resulta procedente cuanto existe mora o retardo en el pago de las respectivas mesadas pensionales ya reconocidas, de tal suerte que se considera que proceden los aludidos intereses, única y exclusivamente, a partir de la fecha en que ha sido expedido el acto administrativo mediante el cual se ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones, obviamente, en el evento en que no se cumpla lo ordenado en el mismo, situación que no ocurre en el sub judice, pues tal y como se ha señalado al demandante no le asiste derecho a retornar del RAIS administrado por COLFONDOS S.A al RPMPD administrado por COLPENSIONES, toda vez que el mismo realizó traslado válido de régimen pensional en el año 1995, así mismo no hizo uso del derecho de migrar de régimen pensional conforme los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 del año 2003, encontrándose su negativa respaldada legalmente, sin que con ello se le desconozca derecho alguno al actor, por lo tanto no hay lugar a decretar la mora aquí pretendida, adicional a ello que mi representada resolvió la petición dentro de los términos

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

establecidos en la Ley y ratificados por la Corte Constitucional entre otras en la sentencia C- 1024 de 2004 MP: Rodrigo Escobar Gil y T- 588 de 2003 M.P: Eduardo Montealegre Lynnet, puesto que el demandante presentó solicitud de nulidad de traslado se radico el día 27 de julio de 2022 y Colpensiones dio respuesta mediante oficio No. BZ2022_103556502220454 del 27 de julio de 2022.

Finalmente, teniendo en cuenta que Colpensiones ha obrado de buena fe en todas sus actuaciones y la misma no incidió en la decisión de traslado por la que opto el demandante, en caso de existir sentencia favorable a sus intereses, se solicita respetuosamente que COLPENSIONES sea exonerada de las costas del proceso, así como de los posibles perjuicios que el actor refiere le fueron causados. La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá, el tres (3) de agosto de 2023.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y
Defensa Judicial de Colpensiones

Proyectó: APMB